





# RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

## PROBIDAD EN CARABINEROS E INVESTIGACIONES

BOLETÍN 12250-25

**RESEÑA LEGISLATIVA**  
es una publicación de **LIBERTAD Y DESARROLLO**

**DIRECTOR RESPONSABLE:**

Luis Larraín A.

**EDITOR:** Pablo Kangiser G.

**DIRECCIÓN:** Alcántara 498, Las Condes, Santiago, Chile.

**1367**  
**17 ENERO 2019**

# RESEÑA LEGISLATIVA

ANÁLISIS, COMENTARIOS Y OPINIÓN DE LYD A PROYECTOS DE LEY INGRESADOS AL CONGRESO

**1367**

**17 ENERO 2019**

## PROBIDAD EN CARABINEROS E INVESTIGACIONES

BOLETÍN 12250-25

## ÍNDICE

I DESCRIPCIÓN	3
II OPINIÓN EJECUTIVA	4
III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	6
IV COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	10
V COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO	12
VI TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	18

## I DESCRIPCIÓN

BOLETÍN 12250-25

### PROBIDAD EN CARABINEROS E INVESTIGACIONES

#### REFERENCIA

Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

#### INICIATIVA

Mensaje presidencial

#### ORIGEN

Senado<sup>1</sup>

#### MINISTERIOS

Del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda

#### INGRESO

20 de noviembre de 2018

#### ARTICULADO

Cuatro artículos permanentes y dos transitorios; los artículos permanentes modifican, respectivamente, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; la ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la ley Sobre Probidad de la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

1. Este proyecto de ley fue ingresado, con igual fecha y con el mismo contenido, tanto por la Cámara de Diputados con número de boletín 12248-25, como por el Senado, como boletín 12250-25. El primero se encuentra retirado y el segundo se tramita con urgencia.

## II OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

PROBIDAD EN  
CARABINEROS E  
INVESTIGACIONES

**EL PROYECTO DE LEY INCORPORA MEDIDAS QUE NO SOLO SE REFIEREN AL RESGUARDO DE LA GESTIÓN FINANCIERA, SINO TAMBIÉN DE OTROS ASPECTOS RELEVANTES EN EL OBRAR POLICIAL, DOTANDO A LAS INSTITUCIONES DE CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS A FIN DE SANCIONAR LOS EXCESOS EN LA FUNCIÓN POLICIAL.**

El proyecto de ley en estudio forma parte de las medidas propuestas en la mesa de trabajo de Acuerdo por la Seguridad Pública. El Acuerdo reflejó la importancia de contar con policías robustas para enfrentar las tareas de prevención, control e investigación del delito, para lo cual consideró apremiante una reformulación institucional, frente a los nuevos conflictos que enfrentan tanto interna como externamente. A su vez, los miembros de la mesa recomendaron incorporar parámetros modernos de gestión, mayor fiscalización, auditorías, controles financieros, rendiciones de cuentas y procedimientos claros de denuncia de irregularidades y de falta de probidad.

Recogiendo estas ideas, el proyecto de ley incorpora medidas que no solo se refieren al resguardo de la gestión financiera, sino también de otros aspectos relevantes en el obrar policial, dotando a las instituciones de controles internos y externos a fin de sancionar los excesos en la función policial y cualquier otra conducta que se aleje de los estándares de probidad y transparencia. Para ello, dispone la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial para definir los objetivos institucionales de las policías, respecto de los cuales deberá rendirse cuenta pública. Además, crea mecanismos de control interno y externo para supervigilar el ejercicio de las funciones de las policías y prevenir y controlar faltas de probidad e infracciones a los reglamentos de conducta. A su vez, se entrega a la Subsecretaría del Interior el control del presupuesto y se ordena la creación de un Comité de Auditoría Policial en cada una de las instituciones, contemplándose auditorías externas y unidades de auditoría interna.

En general, el proyecto presenta un conjunto armónico que tiende a la finalidad propuesta; pero podría revisarse si la abundancia de nuevas altas reparticiones, planes estratégicos e instancias de control y fiscalización incidirán negativamente en algún aspecto administrativo, por el peligro de burocratización excesiva. No obstante, se trata de una buena iniciativa, oportuna por lo demás, presentada por el Ejecutivo, que apunta en la dirección correcta para modernizar a Carabineros y la Policía de Investigaciones y dotarlos de mayores instrumentos para el control de la gestión y el control de la probidad al interior de ambas instituciones.

EN GENERAL, EL PROYECTO PRESENTA UN CONJUNTO ARMÓNICO QUE TIENDE A LA FINALIDAD PROPUESTA; PERO PODRÍA REVISARSE SI LA ABUNDANCIA DE NUEVAS ALTAS REPARTICIONES, PLANES ESTRATÉGICOS E INSTANCIAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN INCIDIRÁN NEGATIVAMENTE EN ALGÚN ASPECTO ADMINISTRATIVO.

---

## III CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

PROBIDAD EN  
CARABINEROS E  
INVESTIGACIONES

Los cuatro artículos permanentes del proyecto de ley contienen sendos conjuntos normativos, que se resumen a continuación.

### 1.- Respetto de Carabineros de Chile

**1.a.-** Se obliga a Carabineros a establecer un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con un horizonte de ocho años, evaluado cada cuatro años, que definirá objetivos institucionales y la distribución de los recursos humanos y logísticos necesarios para lograrlos. El Plan será remitido a ambas cámaras del Congreso, una vez aprobado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y publicado en el sitio web institucional. Adicionalmente, el General Director elaborará, dentro de los tres meses de haber asumido el cargo, un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, que permita ejecutar el Plan Estratégico.

**1.b.-** Ambos planes, el Estratégico y el Anual, serán supervisados y evaluados por el Alto Mando Policial, esto es, el Director General y los Generales Inspectores. Ello se realizará conforme a un sistema de supervisión y evaluación policial, cuyos protocolos se ajustarán a los métodos modernos de gestión, todo lo cual se determinará por la vía reglamentaria.

**1.c.-** Se impone al Director General la obligación de rendir cuenta anual en audiencia pública sobre su gestión

#### SE IMPONE AL DIRECTOR GENERAL LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTA ANUAL EN AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE SU GESTIÓN INSTITUCIONAL.

institucional. Dentro de los tres meses siguientes a la cuenta anual, rendirá cuenta a nivel regional y comunal a través de sus respectivas autoridades policiales, cuyos antecedentes quedarán a disposición de la autoridad civil en el sitio web de Carabineros. En el mismo sitio se publicarán cada tres meses, las estadísticas e información institucional territorialmente desagregada; pero se omitirán los datos que permitan identificar a los funcionarios o sus familias.

**1.d.-** También rendirá cuenta al menos semestralmente ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sobre los gastos reservados, que estarán sujetos a control presupuestario, financiero y de mérito.

**SE MANTENDRÁ UN REGISTRO DE ABUSOS Y OTROS ACTOS ARBITRARIOS COMETIDOS POR EL PERSONAL POLICIAL, QUE ESTARÁ DISPONIBLE A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL, EN LA QUE SE PODRÁ HACER EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO.**

**1.e.-** Las órdenes generales dictadas por la Institución deberán ser informadas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública dentro de 15 días. Además, habrá un registro automatizado de toda la normativa interna, disponible para sus autoridades y el referido Ministerio.

**1.f.-** También se mantendrá un registro de abusos y otros actos arbitrarios cometidos por el personal policial, que estará disponible a través de una plataforma virtual, en la que se podrá hacer el seguimiento respectivo. Se regulará mediante un reglamento.

**1.g.-** Con aprobación de la Subsecretaría del Interior, se elaborará un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas del personal que contendrá un mecanismo confidencial para denuncias anónimas de los miembros de la propia institución. Las investigaciones internas que se realicen en relación a estas denuncias serán comunicadas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la Contraloría General o al Ministerio Público, según corresponda.

**1.h.-** En materia de auditoría interna, existirá una Alta Repartición, dependiente directamente del General Director y a cargo de un General, para controlar las operaciones financieras y contables, así como para proponer los objetivos institucionales de auditoría, incluyendo un Plan Anual. Esta repartición estará conformada principalmente por profesionales civiles altamente calificados, contratados sobre la base de honorarios, sin integrar la planta, pero sujetos a jerarquía y disciplina institucional.

**1.i.-** Adicionalmente, se crea un Comité de Auditoría Policial, integrado por un representante de la Subsecretaría del Interior, otro del Ministerio de Hacienda y por un General Inspector de Carabineros. Este Comité contratará anualmente un auditor externo para evaluar el cumplimiento de la normativa legal que rige las operaciones financieras, así como la eficiente asignación de los recursos. Al auditor se le entregará trimestralmente información en el formato de una Ficha Estadística Codificada Uniforme, en la forma que disponga la Subsecretaría del Interior. El Comité emitirá un informe de resultados, así como sobre recomendaciones y modificaciones que surjan de su supervisión y examen, remitido al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de la Subsecretaría del Interior, a la Dirección General institucional y a la Comisión Mixta Especial de Presupuesto del Congreso Nacional. El Comité cumplirá sus funciones en la forma que disponga un decreto supremo.

**SE CREA UN COMITÉ DE AUDITORÍA POLICIAL, INTEGRADO POR UN REPRESENTANTE DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, OTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y POR UN GENERAL INSPECTOR DE CARABINEROS.**

## 2.- Respetto de la Policía de Investigaciones (PDI) (en forma similar a la situación de Carabineros)

**2.a.-** La PDI elaborará un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, a ocho años plazo, pero evaluado cada cuatro años.

**2.b.-** Asimismo, el Director General elaborará, dentro de los tres meses de asumir el cargo, un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, para ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico.

**2.c.-** La supervisión y evaluación de dicho Plan estará a cargo del Alto Mando policial, compuesto por el Director General y los Prefectos Generales.

**2.d.-** El Director General, en el mes de julio de cada año, rendirá cuenta en audiencia pública, y también a nivel regional a través de las respectivas autoridades policiales.

**2.e.-** También deberá publicar en su página web institucional las estadísticas e información institucional territorialmente desagregada.

**2.f.-** Deberá, en forma similar a Carabineros, habilitar un sistema de reclamos ante abusos u otros actos arbitrarios de su personal, y elaborará un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas.

**2.g.-** Se crea un Comité de Auditoría Policial integrado por un representante de la Subsecretaría del Interior, otro del Ministerio de Hacienda y un Prefecto General de la PDI. Contratará anualmente un auditor externo para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de operaciones financieras, así como la eficiente asignación de recursos.

**2.h.-** En materia de presupuesto y de control de gastos reservados, se rendirá cuenta en forma similar a lo que se establece para Carabineros de Chile.

**2.i.-** Del mismo modo, existirá una auditoría interna, paralela a la de Carabineros.

## 3.- Mayores atribuciones al Ministerio del Interior y Seguridad Pública

**3.a.-** En concordancia con las nuevas obligaciones de información y de sometimiento a control de la autoridad, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública queda dotado de las atribuciones para solicitar información desagregada de las cuentas públicas de ambas policías, tanto a nivel nacional, regional y local, así como para coordinar, ejecutar y liderar acciones conjuntas con otros órganos de la Administración del Estado, orientadas al control de fronteras y al combate del crimen organizado. Tales órganos son los siguientes: ministerios, intendencias, gobernaciones y los órganos y servicios públicos, la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.

**3.b.-** También queda facultado para el control presupuestario, financiero y de mérito de las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas.

#### **4.- Declaración de intereses y de patrimonio**

La obligación de efectuar declaración de intereses y de patrimonio ya existe para oficiales generales y oficiales superiores (coroneles) de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Ahora se agregan, dentro del nivel jerárquico de oficiales jefes, el grado de Teniente Coronel de Ejército y sus equivalentes en la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones.

## IV COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

PROBIDAD EN  
CARABINEROS E  
INVESTIGACIONES

La estrategia normativa que utiliza el proyecto de ley, tanto para Carabineros como para la PDI, consiste en establecer un sistema de obligaciones al interior de cada institución, con amplias facultades de fiscalización para el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. En virtud de dicho sistema, de suyo complejo e interrelacionado, se configura un mecanismo de control recíproco de las unidades con competencia en la administración de los recursos, de forma tal que, si llegase a suceder alguna irregularidad en cualquier instancia al interior de una institución, ésta debiese ser detectada por alguno de los otros órganos dentro del mismo sistema institucional, cuya jerarquización la encabeza el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Para ello conviene visualizar, resumidamente, que tanto al interior de Carabineros como de la PDI se crean los siguientes nuevos organismos e instrumentos de control y fiscalización:

- el Plan Estratégico de Desarrollo Policial, controlado por el Alto Mando policial;
- el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, controlado por el Alto Mando policial;
- el sistema de supervisión y evaluación de la gestión policial;
- una rendición de cuenta en audiencia pública por parte del General Director, en el curso del mes de junio de cada año;
- una rendición de cuenta anual a nivel regional y comunal, a través de sus respectivas autoridades institucionales;
- una publicación de estadísticas e información trimestral en la página web;
- información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública de las órdenes generales dictadas por Carabineros e Investigaciones, que serán informadas en el plazo de 15 días corridos desde su formulación;
- un registro sistematizado de toda su normativa interna a disposición de sus autoridades institucionales, y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública;
- un sistema para la interposición de denuncias y reclamos contra funcionarios en la página web;

**SE CONFIGURA UN MECANISMO DE CONTROL RECÍPROCO DE LAS UNIDADES CON COMPETENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, DE FORMA TAL QUE, SI LLEGASE A SUCEDER ALGUNA IRREGULARIDAD EN CUALQUIER INSTANCIA AL INTERIOR DE UNA INSTITUCIÓN, ÉSTA DEBIESE SER DETECTADA POR ALGUNO DE LOS OTROS ÓRGANOS DENTRO DEL MISMO SISTEMA INSTITUCIONAL.**

- un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas de los funcionarios;
- una Alta Repartición encargada de la función de auditoría interna;

- un Comité de Auditoría Policial, que contratará anualmente a un auditor externo;
- una Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) que contenga la información financiera que será entregada trimestralmente al auditor externo.

Si bien resulta positivo reforzar los instrumentos de control tanto externos como internos, en general, debe revisarse en el debate de esta iniciativa, si eventualmente la producción de un gran número de mecanismos de control y fiscalización, redundará en lograr el objetivo buscado o si bien puede devenir en una mayor burocracia que no aporte a la consecución de los fines. Dicho de otro modo, el proyecto se encuentra frente a dos variables contradictorias: si aumentan los controles podría disminuir correlativamente algún aspecto de la eficiencia administrativa; y viceversa, menores controles hacen aparecer zonas de riesgo de corrupción.

Por esto es difícil señalar asertivamente cuál es el nivel óptimo de control y fiscalización, el cual bien puede variar con el tiempo y con el historial institucional y, sobre todo, con el nivel de conciencia ética de los funcionarios, que normalmente estará en consonancia con el nivel ético promedio de la sociedad.

Lo que ha sucedido recientemente, tal como lo han dado a conocer los medios de comunicación social, es que se ha abusado de la falta de fiscalización y algunos funcionarios de Carabineros han tenido la oportunidad de apropiarse de ingentes sumas de dinero sustraído

al patrimonio público, además de haber evidenciado deficiencias en los procedimientos, protocolos y proceder de las Fuerzas de Orden.

**EL PROYECTO SE ENCUENTRA  
FRENTE A DOS VARIABLES  
CONTRADICTORIAS: SI  
AUMENTAN LOS CONTROLES  
PODRÍA DISMINUIR  
CORRELATIVAMENTE  
ALGÚN ASPECTO DE LA  
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA;  
Y VICEVERSA, MENORES  
CONTROLES HACEN  
APARECER ZONAS DE RIESGO  
DE CORRUPCIÓN.**

## V COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO

PROBIDAD EN  
CARABINEROS E  
INVESTIGACIONES

El proyecto está técnicamente bien estructurado y no presenta mayores aspectos que objetar; sin embargo, es necesario detenerse en una cuestión relativa a las materias de ley contenidas en él. En efecto, algunas disposiciones corresponden claramente a la materia de ley señalada en el artículo 65, inciso cuarto, N°2 de la Constitución Política de la República, relativa a la determinación de las funciones y atribuciones de los órganos del Estado. Así, por ejemplo, la creación de la Alta Repartición encargada de controlar las operaciones financieras y contables puede estimarse una nueva atribución institucional que puede perfeccionarse mediante la dictación de una norma de rango legal. Del mismo modo, la creación de un Comité de Auditoría Policial facultado para contratar, sobre la base de honorarios, a un auditor externo, está también en similar situación.

Por otra parte, la creación de dos Divisiones al interior de la Subsecretaría del Interior para relacionarse, respectivamente, con Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones de Chile, corresponde a la misma materia de ley anteriormente señalada; dichas Divisiones deberán contar con los recursos humanos y financieros necesarios, lo que equivale a decir que requerirán de gasto público, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Respecto de otras materias, sin embargo, pudiera haberse intentado su regulación por la vía reglamentaria,

como es el caso de algunas supervisiones periódicas, cuentas anuales o trimestrales presentadas ante diversas autoridades, publicación de datos estadísticos y otras disposiciones similares, lo que podría colaborar con aportar la necesaria flexibilidad de la normativa y su evaluación y corrección, más simple, de tiempo en tiempo. Pero se ha optado por constituir un todo orgánico con las demás prescripciones orientadas al mismo fin, cual es, lograr una efectiva probidad y transparencia en las funciones y operativa de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.

Algunos aspectos más puntuales se comentan a continuación, conjuntamente con la transcripción del proyecto de precepto legal respectivo:

## TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

**Artículo 7° bis.-** A fin de evaluar y controlar la adecuada respuesta de la institución ante abusos u otros actos arbitrarios de su personal en el ejercicio de sus funciones, Carabineros de Chile deberá implementar y mantener operativo un sistema habilitado para la interposición de denuncias y reclamos.

El acceso a este sistema deberá además encontrarse disponible a través de la plataforma institucional virtual de Carabineros de Chile, en la que además el reclamante o denunciante podrá acceder a la información pertinente para hacer seguimiento a su tramitación y resolución. Asimismo, en dicha plataforma deberá encontrarse estadística relativa a la tramitación, estado y resolución de las denuncias o reclamos recibidos mediante dicho sistema, la cual se deberá actualizar, al menos, trimestralmente.

Un reglamento definirá el funcionamiento de este sistema, así como los plazos y formalidades de los procedimientos a los que dará lugar su uso y aplicación, los cuales deberán respetar las garantías de un racional y justo procedimiento.

## COMENTARIOS

La misma norma se le hace aplicable a la PDI.

La posibilidad de efectuar denuncias o reclamos por el comportamiento del personal es una medida adecuada para instar por el correcto cumplimiento de las funciones y atribuciones, en cuanto simplifica y estandariza la forma en que estas pueden efectuarse.

Este inciso continúa la idea del anterior y la hace materialmente posible a través de la página web institucional, plataforma que ya existe en el caso de Carabineros de Chile para realizar reclamos y sugerencias, pero no se limita a ella, pues ésta es “además” de otros medios que se entiende que son los usuales, como un libro de reclamos para quienes no tengan acceso a internet.

Por otra parte, la inclusión de una denuncia en el sistema no requiere de su comprobación previa, sino que, por el contrario, con ella se da comienzo a la actividad institucional, y se informará, por el mismo medio, de las medidas que se adopten o del sumario que se hubiere instruido, en su caso.

No obstante lo anterior, es inconveniente sobrecargar la información con las estadísticas sobre reclamos, lo que puede dificultar la consulta que interesa al denunciante. A este respecto, el artículo 4° ter del mismo proyecto obliga a publicar trimestralmente las estadísticas e información institucional, norma que debería ser suficiente para transparentar este aspecto, y dejar en este artículo 7° bis exclusivamente el caso de los reclamos y denuncias.

La mera remisión al reglamento, sin embargo, puede ser insuficiente, dado que se regula un procedimiento que podría afectar garantías constitucionales, como la misma norma propuesta lo señala.

En este sentido, para garantizar un justo y racional procedimiento no basta con que la norma legal lo mencione, sino que debe señalar, concretamente, cuáles son las medidas que lo garantizan en el nivel legal.

Tratándose de un procedimiento que puede dar lugar a sanciones (aunque sean del ámbito administrativo), la forma de hacer efectivas las garantías procesales debe quedar consignada, al menos en sus aspectos esenciales, en la ley. Así se ha entendido el inciso sexto del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política, que establece que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

Además, el inciso quinto del mismo número, señala, respecto de los integrantes de las FF.AA. y de Orden y Seguridad, que el derecho a defensa jurídica, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, se regirá “por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos”.

En presencia de esta disposición constitucional parece preferible remitirse a los estatutos institucionales, en lugar de dictar un nuevo reglamento que sería discutible por quedar, eventualmente, incompleto.

**Artículo 7° ter.-** Carabineros de Chile elaborará un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas, tales como faltas a la probidad funcionaria, infracciones o faltas a los códigos de conducta y reglamentos disciplinarios, el que se radicará en una Alta Repartición y deberá contar con un mecanismo confidencial de denuncias anónimas para miembros de la propia institución. Previo a su implementación, el modelo deberá ser aprobado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior.

Esta norma también es aplicable a la PDI (artículo 2° N° 2 del proyecto de ley).

Se trata de una medida esencial para impedir actos de corrupción, que consiste en la potestad de denunciar al interior de la institución, por parte de miembros de la misma. Lo cierto es que quienes mejor pueden pesquisar la corrupción son los mismos que comparten las funciones policiales. Además, constituye un desincentivo a que un funcionario “invite” a otro a participar en un acto incorrecto, puesto que siempre éste podrá hacer una denuncia anónima.

De aquí debe inferirse, además, que las denuncias y reclamos de que trata el artículo 7° bis anteriormente transcrito, efectuadas por particulares, no son

Los resultados de las investigaciones internas que se realicen en virtud de lo dispuesto en el inciso precedente, deberán ser comunicados, según corresponda, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la Contraloría General de la República o al Ministerio Público.

**Artículo 89 (93).**- Del uso y disposición del presupuesto de Carabineros de Chile, del mérito de la administración de los fondos y de su contabilidad, tanto en moneda nacional o extranjera, deberá rendirse cuenta, al menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior, sin perjuicio de las obligaciones de rendición e información existentes en otros cuerpos legales. Para lo anterior, se tendrá en especial consideración lo dispuesto en las letras b), j) y k) del artículo 3°<sup>2</sup> y el artículo 9°<sup>3</sup>, ambos de la ley N° 20.502.

anónimas sino individualizables, sin perjuicio de adoptarse medidas de protección, materia que no aparece desarrollada en el proyecto, y que cabría modificar para proteger a los denunciantes.

Está claramente dicho, entonces, que las denuncias al interior de la institución pueden referirse tanto a delitos funcionarios como a infracciones administrativas o simples faltas a la disciplina, lo que es consistente con el objeto general de la iniciativa.

El control de mérito es de la mayor importancia en materia de fiscalización. Por ejemplo, si se trata de la compra de un vehículo, la fiscalización contable solo se ocupa de cuadrar el valor del bien con el monto de los egresos. El control de mérito, sin embargo, se ocupa además de examinar si era o no necesario, de acuerdo a las necesidades del servicio, haber adquirido dicho vehículo motorizado.

2. El artículo 3° (letras b), j) y k) de la ley 20.502, modificado por el artículo 3° del proyecto de ley, quedaría con la siguiente redacción (se destaca la parte modificada):  
 Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, corresponderá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública:  
 b) Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.  
 En cumplimiento de esta facultad, el Ministerio solicitará a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, al menos semestralmente, informes, antecedentes y estadísticas tendientes a materializar una evaluación de las medidas y programas adoptados por dichas Fuerzas para una eficaz, racional y eficiente mantención del orden público, tales como aquellos relativos a la distribución del personal; medidas para el control e investigación de delitos; los datos sobre la ocurrencia de delitos en los cuadrantes donde se aplique el plan respectivo junto con las acciones y medidas adoptadas a su respecto; nóminas de niños o niñas en situación de vulnerabilidad y los datos sobre las políticas y planes preventivos, de control e investigación de hechos delictivos, entre otros. **De igual forma, deberá solicitar anualmente la información desagregada de las cuentas públicas de ambas policías, tanto a nivel nacional, regional y local, cuando corresponda.**  
 j) Coordinar, ejecutar y liderar acciones conjuntas con otros órganos de la Administración del Estado señalados en el inciso final del artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, orientadas al control de fronteras y/o el combate del crimen organizado, mediante decreto fundado expedido "Por orden del Presidente de la República". Dichas acciones serán ejecutables en los términos que el referido decreto señale, dentro del ámbito de las competencias que las respectivas normas orgánicas dispongan para quienes participen de las mismas.  
 k) Ejercer, a través de la Subsecretaría del Interior, el control presupuestario, financiero y de mérito sobre las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Para dicho propósito, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá, al menos semestralmente, requerir la información de estadísticas e información sobre el avance de su gestión financiera.
3. Artículo 9° de la Ley N° 20.502:  
 Artículo 9°.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la seguridad pública interior, mantención del orden público, la coordinación territorial del gobierno y las demás tareas que aquel le encomiende.  
 Le corresponderá, asimismo, el tratamiento de datos y procesamiento de la información que sea requerida para el cumplimiento de las facultades señaladas en el artículo 3° y, especialmente, aquellas relativas a la mantención del orden público. De igual manera, deberá dar cumplimiento a las funciones de evaluación y control que el artículo 3° confía al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Un reglamento precisará la forma, modalidades y alcance de la desagregación de la información y datos que en virtud de aquel precepto se solicite a las Fuerzas de Orden y Seguridad.  
 En cumplimiento de tales funciones, podrá celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, especialmente con las municipalidades, que digan relación directa con la mantención del orden y seguridad pública a nivel local.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	COMENTARIOS
<p>Los gastos reservados, cuyos montos serán fijados anualmente, serán rendidos en la forma que disponen los artículos 4°<sup>4</sup> y 6°<sup>5</sup> de la Ley N° 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.</p>	<p>Respecto de los gastos reservados no habría control de mérito, pues el proyecto de ley se remite a las normas vigentes, que se citan a pie de página, y que señalan la forma como se acostumbra a efectuar su rendición de cuentas, esto es, en forma secreta.</p> <p>Este secreto es comprensible respecto de la opinión pública o de los ciudadanos en general, pero no respecto de otros fiscalizadores, además del Contralor General de la República que figura en la ley. Sería aconsejable que también el Ministro del Interior y Seguridad Pública pudiera intervenir (cuando él lo determine) y que pueda controlar el mérito del gasto, siempre, obviamente, bajo estricto secreto.</p>
<p><b>Artículo 4° del proyecto de ley.-</b> Incorpórase al numeral 5° del artículo 4° de la Ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, antes del punto (.), la expresión “, así como los oficiales con el grado superior del nivel jerárquico de oficiales jefes de estas instituciones”<sup>6</sup>.</p>	<p>Este precepto (artículo 4° N° 5) obliga actualmente a los generales y coroneles de las FF.AA. y Carabineros y equivalentes en la PDI a efectuar la declaración de intereses y patrimonio. La modificación consiste en agregar “a los oficiales con el grado superior del nivel jerárquico de los oficiales jefes de estas instituciones”.</p> <p>En las FF.AA. son oficiales jefes los Tenientes coroneles de Ejército, los Capitanes de Fragata en la Armada y los Comandantes de Grupo en la Fuerza Aérea; y en Carabineros, los Tenientes coroneles. A estos oficiales se les exigirá desde ahora la declaración de intereses y patrimonio que actualmente obliga a generales y coroneles.</p>

4. Artículo 4° de la Ley N° 19.863:  
Artículo 4°.- De los gastos reservados se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta, a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a éste sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse una declaración jurada que acredite que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6°.  
El examen y juzgamiento de las cuentas corresponderá al Contralor General de la República, quien lo efectuará expresando al Presidente de la República, de manera secreta, su opinión sobre el destino otorgado a estos gastos. La autoridad fiscalizadora conservará, en todo caso, la responsabilidad que le corresponde por la mantención del secreto.
5. Artículo 6° de la Ley N° 19.863.- Los gastos reservados solo podrán emplearse en los fines propios de las actividades respectivas. Con cargo a estos no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos. Del mismo modo, no podrán efectuarse transferencias de recursos provenientes de gastos reservados para el financiamiento de campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales.
6. Artículo 4° N° 5 de la Ley N° 20.880, modificado por el artículo 4° del proyecto de ley, quedaría con la siguiente redacción (se destaca la parte modificada):  
Artículo 4°.- Además de los sujetos señalados en el Capítulo 3° [De la declaración de intereses y patrimonio efectuada por otras autoridades] de este Título, se encontrarán obligados a realizar una declaración de intereses y patrimonio, en los términos que indica esta ley, las siguientes personas:  
5. Los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, **así como los oficiales con el grado superior del nivel jerárquico de oficiales jefes de estas instituciones.**

La formulación de la norma, algo compleja, se debe a que en el nivel jerárquico señalado (oficiales jefes) existen dos niveles (en el Ejército, Teniente coronel y mayor), y la proposición solo pretende incluir al “grado superior del nivel jerárquico”, esto es, excluye al grado inferior: a los mayores de Ejército, a los capitanes de corbeta en la Armada y a los comandantes de Escuadrilla en la Fuerza Aérea.

En cuanto al fondo, parece razonable exigir la declaración de intereses y patrimonio no solo a los generales y coroneles, sino también al grado inmediatamente inferior al de Coronel (y su equivalente en la PDI). En el caso de Carabineros, que se ha dado a conocer, se demostró la conveniencia de obligar también a este nivel jerárquico a efectuar la aludida declaración.

## VI TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

PROBIDAD EN  
CARABINEROS E  
INVESTIGACIONES

El texto íntegro del proyecto de ley se encuentra en el siguiente hiper vínculo

[https://www.25camara.cl/pley/pley\\_detalle.aspx?prmID=12772&prmBoletin=12250-](https://www.25camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12772&prmBoletin=12250-)